CAPITULO V

Respuesta del Estado Colombiano.

5. Respuesta del Estado Colombiano.

5.1. Respuesta Estatal para proteger jurídica e institucionalmente los derechos humanos de las mujeres bajo conflicto armado.

En lo que respecta a la problemática de las mujeres bajo conflicto armado y post conflicto. En países de América y el Caribe en dicho período no se produjeron de parte de los Estados respuestas que considerasen las cuestiones de género a fin de proteger jurídica e institucionalmente los derechos humanos de las mujeres y brindarles a éstas la atención debida para enfrentar la situación de vulnerabilidad. Menos aún fueron tomadas en cuenta en los procesos de pacificación y reconstrucción.

Los Estados de la región, a efectos de confrontar situaciones de convulsión política o conflicto armado, persistieron en estrategias bajo conducción castrense de intensa capacidad lesiva sobre la población civil. Con mandos militares y operativos formados en concepciones inspiradas en la llamada “doctrina de seguridad nacional”, las mujeres continuaron siendo objeto de diversas formas de violencia, destacándose la impunidad de estos hechos.

Las acciones de carácter humanitario desplegadas por organismos gubernamentales e intergubernamentales se caracterizaron por profundos sesgos de género, omitiendo la atención de daños y

riesgos específicos, e incluso reforzando en ocasiones desventajas de género.

En el marco del proceso preparatorio a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Muja, la Coordinación Regional de ONGs de América Latina y el Caribe, señalaba entre las manifestaciones críticas de la violencia contra las mujeres aquella ocurrida “en el marco de los conflictos armados en zonas militarizadas: detención arbitraria, tortura, violación, sexualidad forzada, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, Las mujeres constituyen el mayor numero (de personas bajo la condición) de refugiadas y desplazadas en la región, situación que afecta remarcablemente a las mujeres indígenas.” Entre las prioridades levantadas se consignó: “Que los graves saldos para las mujeres producidos en el marco de los conflictos armados sean atendidos y se involucre la activa participación de las mujeres en los procesos de pacificación y reconstrucción”.¹³⁷

5.1.1. Colombia disposiciones legales

“Conflicto armado y violencia política: En los últimos cuarenta años Colombia ha vivido un avance progresivo de conflicto armado. Ha habido 11,121 acciones guerrilleras. En el período 1995-1997, del

¹³⁷ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

total de 1.080 municipios, 798 registraron alguna acción guerrillera. En el período 1985-1990, de un total de 338 municipios 48 tuvieron una alta acción guerrillera, 158 paramilitar, y 132 de ambos actores. En el periodo 1991-1997, las cifras se incrementaron: para un total de 515 municipios, hubo 112 con alta acción guerrillera, 202 paramilitares y 202 de ambos actores. Se estima que la población desplazada alcanza a 1 millón de personas. El 56% de la población desplazada lo conforman mujeres. El 31% de estas mujeres son jefas de hogar. El flujo de desplazamiento combina desplazamientos masivos e individuales.”¹³⁸

Tratados internacionales

En 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano, mediante la Ley 051. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue igualmente incorporada mediante la Ley 248, y sancionada por el Presidente de la República, el 29 de diciembre de 1995. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben ser

¹³⁸ Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer. 2000 (CLADEM).

interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Cualquier persona que acuda a los tribunales con el objeto de solicitar protección de alguno de los derechos amparados por los tratados ratificados por Colombia podrá invocar su aplicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia jurisdiccional.¹³⁹

Constitución Nacional 1991

El art. 42, inciso 5, consagra expresamente que la violencia producida al interior de la familia es considerada destructiva de su armonía y unidad y, por tanto, sancionable conforme a ley.

Legislación Nacional¹⁴⁰

* **Ley 248.** Incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La Corte Constitucional, en su función de control constitucional, declaró la exequibilidad de la misma mediante sentencia C/408/96.

¹³⁹ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

¹⁴⁰ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

Fecha: 1995.

* **Decreto 1398.** Desarrolla la Ley 051 que introdujo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el ordenamiento jurídico colombiano.

Fecha: 1990.

* **Ley 294 Ley de violencia intrafamiliar.** Define quiénes son los sujetos protegidos: los cónyuges (varón y mujer) o compañeros permanentes; el padre, la madre, los ascendientes, descendientes y demás personas que permanezcan en la unidad familiar. Establece medidas de protección para víctimas de maltratos físicos, psíquicos, sexuales, trato cruel intimidatorio o degradante, incluido maltrato mediante restricción a la libertad. Define los tipos penales “maltrato constitutivo de lesiones personales” y “maltrato mediante restricción a la libertad”. Considera trato degradante obligar o inducir al consumo de sustancias psicotrópicas a otra persona o consumirlas en presencia de menores. No hay lugar a excarcelación ni a libertad condicional cuando cualquiera de los delitos que se cometieron en violación de una orden de protección. La ley incrementa, de una tercera parte a la mitad, las penas contempladas para los delitos de constreñimiento ilegal, constreñimiento para delinquir, tortura, trata de mujeres y de menores, y estímulo a la prostitución de menores. La pena por violación sexual en la relación conyugal es menor que la prevista por el Código Penal para los delitos de acceso carnal violento y de acto sexual violento, disposición que ha merecido críticas.

Fecha: 1996.

* **Ley 258.** Establece la afectación de vivienda familiar y dicta otras disposiciones.

Fecha: 1996.

***Ley 360.** Reforma al Código Penal en materia de delitos sexuales, Delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.

Fecha: 7 de febrero de 1997.

* **Ley 387.** Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado: la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Fecha: 18 de julio de 1997.

* **Ley 575,** Reforma parcial de la ley 294. Asigna competencias supletorias al juez de paz y al conciliador en equidad, con el fin de obtener con su mediación que cese la violencia, maltrato o agresión o la evite si litera inminente. El Juez de Paz o el Conciliador en Equidad, si las partes lo aceptan, podrán requerir de las instituciones, profesionales o personas calificadas, asistencia al agresor, a las partes o al grupo familiar. Si los hechos de conocimiento desbordan la competencia del Juez de Paz, éste remitirá la denuncia al Comisario de Familia, el cual no es autoridad judicial, sino de policía, y por lo tanto, no puede dictar medidas limitativas de derechos fundamentales. Si se

requieren tales medidas, deberá intervenir el Juez de Familia o el Promiscuo de Familia, civil municipal o promiscuo municipal.

Fecha: Febrero del 2000.

Aplicación de las leyes, vacíos y normas discriminatorias subsistentes¹⁴¹

Subsisten valores y normas tradicionales muy arraigados en los símbolos y las prácticas cotidianas de hombres y mujeres y en las instituciones.

El discurso de los funcionario/as hace énfasis en el problema de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, de obstáculo para el desarrollo humano de las mismas y de alteración de las dinámicas familiares y de pareja. Sin desconocer esas consecuencias, tales enfoques desdibujan el vínculo entre la eliminación de la violencia contra las mujeres y el reconocimiento social y político de las mujeres como sujetos de derechos humanos.

El acceso a la justicia por parte de las mujeres es muy limitado en la práctica. Al desconocimiento de sus derechos, se suma la falta de recursos económicos para enfrentar los procesos. Las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios legales, por el reducido financiamiento que reciben, no tienen la cobertura suficiente.

¹⁴¹ (CLADEM). 2000:Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

El trato discriminatorio hacia las mujeres, por parte de los operadores de la administración de justicia, particularmente en los procesos sobre violencia familiar y sexual, es un factor que inhibe a las denunciantes de sostener los procesos. A las mujeres se les exige una carga mayor al momento de la prueba.

Políticas públicas, programas y servicios de ámbito nacional.¹⁴²

E] Política para la Equidad y Participación de las Mujeres (EPAM) 1994/1998. Desarrolló programas sectoriales y definió cuatro líneas de acción prioritarias: 1) promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres a través de desarrollos legales y de planes y programas estatales; 2) incidir en la gestión de políticas, planes y programas orientados a la progresiva incorporación de la equidad para las mujeres; 3) generar acciones que permitan una representación y participación equitativa de las mujeres en los espacios de decisiones políticas y sociales; 4) gestionar políticas, planes y programas que contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres. De igual manera, la política reconoció que las mujeres negras, las jefas de hogar, las desplazadas por la violencia y las indígenas deben ser reconocidas y tratadas como población prioritaria, pues son ellas quienes enfrentan las mayores inequidades.

¹⁴² (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

Fecha: 1994

Programa “Vida, Salud y Paz”, Ministerio de Salud.

*** Proyecto “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos para la atención y prevención de la violencia sexual”.** Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Contó con el apoyo del PNUD y la participación de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal.

*** Estudio exploratorio de delitos sexuales. Instituto de Medicina Legal. E Dirección para la Equidad de la Mujer.** Oficina encargada de impulsar y viabilizar de manera transversal, en todas las entidades ejecutoras, la política de equidad y participación para las mujeres. Fue creada por la Ley 188 del Plan Nacional de Desarrollo, 1995,

Fecha: 1996

***Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Decreto 1974. Ministerio de Justicia.**

Fecha: 1996

*** Comité Interinstitucional para la revisión de los procedimientos para la atención a las víctimas de violencia sexual.**

Fecha: julio de 1997.

***Sistema de seguimiento y vigilancia del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Defensoría del Pueblo.**

*** Programas de capacitación y sensibilización para jueces, juezas, fiscales, procuradores y policía. Dirección Nacional de Equidad para la Mujer, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Conserjería Presidencial para los Derechos Humanos.**

*** Proyecto de Fortalecimiento a Comisarías de Familia.**

Fecha: 1995.

***Servicios de Asistencia a Víctimas:**

Defensoría del Pueblo (Oficina Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer y del Anciano), Programa de defensoría pública gratuita.

***Comisarias de Familia.** Creadas por el Decreto Ley 2737 de 1989. En la actualidad existen 272, distribuidas en departamentos y municipios.

***Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).** Entidad promotora de la conciliación a través de la acción de las defensoras y los defensores de familia y los equipos técnicos de los centros zonales, los que ejecutan sus actividades con base en sus subproyectos como asistencia y asesoría a la familia y asistencia social familiar y comunitaria. Para la solución de conflictos existen 203 Centros Zonales de Bienestar familiar.

Asistencia psicológica a través de Hospitales de Primer Nivel.

No existen refugios públicos para dar acogida a víctimas de violencia intrafamiliar. Con aportes privados se sostienen unos pocos sin capacidad ni infraestructura para enfrentar la demanda.¹⁴³

*** Revisión del Derecho Internacional Humanitario.** Con el objetivo de desarrollar acciones contra la violación de mujeres en situación de conflicto armado, capacitando a funcionario/as a fin de garantizar y defender los derechos de las víctimas, tanto como el diseño de una estrategia preventiva.

Se promovió una reforma del Código Penal para incluir la violación en zonas de conflicto armado como un delito de lesa humanidad. No se logró el compromiso de la Fiscalía, el gobierno y del Parlamento.

***Programa de Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 1996/1998,** la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres. Impulsó en las entidades públicas del orden nacional y municipal la participación de las organizaciones y grupos de mujeres. Financió proyectos y propuestas como: la Ruta Pacífica de las Mujeres, que en los años 96, 97 y 98 movilizó más de 3,000 mujeres en pro de la neutralidad activa y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y social del país; los proyectos educativos de la

¹⁴³ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

Asociación de Trabajadores Sexuales de Bogotá; el Programa de Sensibilización de las Mujeres hacia los Cabildos de Paz, el cual se cumplió en seis departamentos que viven el conflicto armado, con el objeto de definir soluciones no violentas frente a los conflictos de orden político, social y familiar; los cabildos preparatorios del Cabildo Nacional “La Paz es asunto de Mujeres”; los proyectos, programas y eventos tendientes a fortalecer la participación de las mujeres en los diferentes procesos de paz; los foros, conferencias, investigaciones y programas de capacitación y sensibilización, relacionados con el tema de la violencia contra las mujeres.

***Política Nacional de Construcción de Paz y de Convivencia Familiar y Cotidiana “HAZ PAZ”, Conserjería Presidencial de Política Social y la Primera Dama de la Nación.** La Dirección Nacional de Equidad para la Mujer se ha involucrado activamente para la incorporación del enfoque de género en dicho programa.

*** Acuerdo 117, Ministerio de Salud.** Ha incluido el maltrato al menor y a la mujer dentro de las enfermedades de interés en salud pública, y ha establecido la obligatoriedad de las entidades de salud respecto a la protección, detección temprana y atención de dicho maltrato.

*** Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 1998/2002.** Es un Plan sin financiación -el Plan de Inversiones de 1999/2002 no incluye ninguna partida para el desarrollo del mismo. Además, el actual gobierno modificó, mediante Decreto 1182 del 29

de junio de 1999, la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que como tal carece de autonomía presupuestal, administrativa y técnica, de presupuesto propio y de capacidad para contratar.

5.1.2. Acciones a cargo de los gobiernos e instituciones

“Se incluyeron, entre otras:

- ejercer debida diligencia en prevenir, investigar y, de acuerdo a la legislación nacional, sancionar los actos de violencia contra las mujeres, sean perpetrados por el Estado o personas particulares;*

- hacer cumplir y/o reforzar las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en la legislación interna para castigar y encarar los daños causados a las mujeres y a las niñas que han sido sometidas a cualquier forma de violencia, sea en el hogar, espacio laboral, la comunidad o sociedad;*

- adoptar, implementar, periódicamente revisar y analizar la legislación para asegurar su efectividad en la eliminación de la violencia contra las mujeres, enfatizando en la prevención de la violencia y la persecución de los agentes de violencia; tomar medidas para asegurar la protección a las mujeres sujetas a violencia, acceso a remedios justos y efectivos, incluida compensación e indemnización a las víctimas y rehabilitación a los perpetradores;*

- *revisar y enmendar la legislación penal y procedimientos que sean necesarios para eliminar cualquier discriminación contra las mujeres a fin de asegurar que la ley penal y procedimientos garanticen a las mujeres efectiva protección y la persecución de los crímenes particularmente dirigidos contra ellas o que las afectan desproporcionadamente, independientemente de las relaciones entre el perpetrador y la víctima, y de impedir la revictimización durante la investigación de los crímenes;*
- *ratificar y/o implementar las normas de derechos humanos e instrumentos que se relacionan con la violencia contra las mujeres;*
- *proveer a las mujeres acceso a los mecanismos de justicia y según la legislación interna, proveerles remedios justos y efectivos por el daño que hayan sufrido, e informarles de sus derechos a fin que sean atendidas a través de esos mecanismos;*
- *crear o fortalecer mecanismos institucionales de manera que las mujeres y las niñas puedan notificar actos de violencia en su contra en un entorno seguro y confidencial, libres de temor de sanciones y cargos;*
- *adoptar leyes, de ser el caso, y reforzar las existentes que sancionen a la policía, fuerzas de seguridad u otros agentes del Estado involucrados en actos de violencia contra las mujeres en el desempeño de sus funciones; revisar la legislación existente y tomar medidas efectivas contra los perpetradores de tal violencia;*

- *tomar acciones en la investigación y sanción a los miembros de la policía, seguridad y fuerzas armadas y otros que perpetran actos de violencia contra las mujeres.*”¹⁴⁴

5.1.3. Acciones regionales.

“Además de las indicadas acciones, se incluyeron otras para ser llevadas adelante por los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, y las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas, los sectores público y privado, y los medios de comunicación, según corresponda:

- *proveer refugio y soporte para niñas y mujeres, consejería, servicios legales gratuitos o de bajo costo, asistencia apropiada para habilitarlas a encontrar medios de subsistencia;*
- *establecer servicios lingüística y culturalmente accesibles para niñas y mujeres migrantes.*

En materia de mujeres y conflictos armados, la Plataforma para la Acción Mundial consideró como asuntos de preocupación a tratar los siguientes:

¹⁴⁴ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

- *la frecuente violación de los derechos humanos de las mujeres en el marco de los conflictos armados, las agresiones masivas en la forma de genocidio, limpieza étnica, violación sexual y embarazos forzados, esclavitud sexual;*
- *la no investigación de crímenes cometidos contra las mujeres la no persecución, el no juzgamiento por tribunales imparciales, y la no sanción a los responsables de tales crímenes ni de otros cometidos por particulares, autoridades o funcionarios (impunidad);*
- *el no respeto a la regla que prohíbe el ataque a civiles, conducta que afecta desproporcionadamente a mujeres y niños;*
- *el desplazamiento, que afecta desproporcionadamente a las mujeres;*
- *la carga sobre las mujeres para atender las necesidades y sostener la vida bajo condiciones adversas;*
- *las dificultades en obtener asilo o la condición de refugiadas;*
- *la subrepresentación de las mujeres en posiciones de toma de decisiones para la resolución de conflictos, mantenimiento de paz, defensa y asuntos de relaciones exteriores;*

- *la falta de reconocimiento de la contribución de las mujeres como educadoras para la paz.*¹⁴⁵

5.1.4. Acciones internacionales y locales.

Como acciones a cargo de los gobiernos e instituciones regionales e internacionales de carácter intergubernamental se incluyeron, entre otras:

- *tomar acciones en la investigación y sanción a los miembros de la policía, seguridad y fuerzas armadas y otros que perpetran actos de violencia contra las mujeres, violaciones al derecho humanitario internacional y violaciones a los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado;*
- *respetar plenamente las normas del derecho humanitario internacional en conflictos armados y tomar todas las medidas requeridas para la protección de mujeres, niños y niñas, en particular contra la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual; fortalecer los mecanismos para investigar y sancionar a todos los responsables y entregar a los perpetradores a la justicia;*

¹⁴⁵ (CLADEM). 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

- *asegurar igual representación de mujeres en todos los niveles de toma de decisión en las instituciones nacionales e internacionales que formulan o influyen políticas en materia de mantenimiento de paz > diplomacia preventiva y actividades conexas, en todas las fases de mediación y negociación de la paz;*
- *integrar una perspectiva de género en la resolución de conflictos armados u otros conflictos, ocupación externa y buscar el balance de género en la nominación y promoción de candidatos para cargos judiciales y otros en todos los cuerpos internacionales relevantes;*
- *fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de reconciliación nacional y reconstrucción tras todas las formas de conflicto;*
- *abordar la conversión de los recursos militares e industrias vinculadas, hacia objetivos dirigidos al desarrollo y la paz;*
- *abordar la reducción del gasto militar, comercio de armas e inversión en producción y adquisición de armas, a fin de permitir asignaciones adicionales al desarrollo económico y social, en particular para el avance de la mujer;*
- *abordar la cuestión de las armas especialmente nocivas y de efectos indiscriminados, entre ellas las minas antipersonales, y promover su eliminación;*

- *combatir el tráfico ilícito de armas;*
- *desalentar la adopción de medidas unilaterales no acordes con el derecho internacional, que supongan impedir el logro de desarrollo económico y social de la población; reafirmar que los alimentos y las medicinas no pueden a ser usados como una herramienta de presión política; aliviar el impacto negativo sobre las mujeres y los niños derivado de sanciones económicas.*

Además de las indicadas acciones, se incluyeron, entre otras, las siguientes para ser llevadas adelante por los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, y las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas, los sectores público y privado, y los medios de comunicación, según corresponda:

- *dar pasos para asegurar que las mujeres estén plenamente involucradas en la planificación diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de corto y largo plazo que provean asistencia a mujeres refugiadas, a aquellas desplazadas que requieren protección internacional y a desplazadas internamente, incluida la administración de campamentos y recursos;*
- *ofrecer adecuada protección y asistencia a mujeres y niños desplazados dentro de sus países y encontrar soluciones a las causas en las que reside su desplazamiento con vistas a prevenirlo y, cuando sea apropiado, facilitar su retorno y reasentamiento;*

- *dar pasos para proteger la seguridad y la integridad física de las mujeres refugiadas y aquellas desplazadas durante su desplazamiento y a su retorno a las comunidades de origen;*
- *tomar, en respeto al principio de no repatriación, todas las medidas adecuadas para asegurar el derecho de las mujeres al retorno voluntario;*
- *asegurar que las mujeres bajo conflicto dispongan de conocimientos sobre sus derechos y procedimientos;*
- *asegurar protección al derecho a la reunificación familiar;*
- *proveer programas de educación, aprendizaje del idioma de la localidad receptora, consejería para mujeres víctimas de violencia, formación ocupacional y para la gestión de pequeñas empresas;*
- *crear conciencia pública sobre la realidad y capacidades de las mujeres desplazadas, alentando la aceptación mutua,*
- *capacitar y sensibilizar en derechos humanos de las mujeres al personal policial y militar en áreas de conflicto armado y de refugio.*¹⁴⁶

¹⁴⁶ (CLADEM). 2000:Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

Legislación sobre Desplazamiento

- Legislación Internacional

- Legislación Nacional

- *Legislación Internacional*

Derecho Humanitario

- Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

- Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966

- Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y sus dos Protocolos Adicionales de 1977

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, inhumanos, o degradantes, 1984

- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, 9 de diciembre de 1948

- Respecto de los derechos humanos en los conflictos armados. Resolución XXIII adoptada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Teherán, 12 de mayo de 1968.
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 26 de noviembre de 1968.
- Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de 1968.
- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III) (CCW.P.III). Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989
- Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. 4 de diciembre de 1989.
- Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Oslo, 18 de septiembre de 1997

▪ ***Legislación Nacional (Colombia)***

Ley 715 de 2001

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

Resolución 4288: Plan de Atención Básica

El objeto de esta reglamentación es definir y caracterizar el Plan de Atención Básica -PAB-, fijar sus componentes y las competencias territoriales para su aplicación.

Resolución 412

Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.

Resolución 3288 -

Resolución 3374 - RIPS

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados

Acuerdo 30

Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Acuerdo 117

Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública.

Decreto Reglamentario 2569 de 12 de Diciembre de 2000

Por primera vez en Colombia se reglamenta la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención y atención del desplazamiento forzado, a través del Decreto 2569, elaborado por la Red de Solidaridad Social y expedido por el Presidente de la República el día 12 de diciembre del 2000.

SENTENCIA N° SU-1150/2000 de la Corte Constitucional

Acciones de tutela instauradas por la Regional de Antioquia de la Defensoría del Pueblo contra la Inspección 8B Municipal de Policía de Antioquia, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín; Marco Tulio Ararat Sandoval contra la Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana de Cali; y Jairo Vicente Reyes Cabrera contra la Red de Solidaridad Social. **Octubre 9 2000**

CONPES 3057 - 10 Noviembre de 1999

Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado

LEY 418 DEL 26 DICIEMBRE DE 1.997

Por la cual se consagran unos instrumentos para búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Titulo II atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto interno **Capitulo 2 Asistencia en materia de salud** Las instituciones hospitalarias publicas o privadas del territorio nacional que presten servicios de salud tienen la obligación de atender de manera inmediata a las víctimas de los atentados terroristas que lo requieran, con independencia de la capacidad socio económica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión

Decreto 173 de 26 de Enero de 1.998

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, de dicho decreto hacen parte los protocolos de Atención para los desplazados, al igual que los recursos asignados dentro del presupuesto de 1998.

2.2.2. SALUD - El Ministerio de Salud y las Direcciones Departamentales y Locales de Salud garantizarán el derecho a la salud de la población desplazada a través de la atención integral en salud que comprende acciones de :

- Servicios de atención medico quirúrgica
- Atención de urgencias
- Hospitalización y Tratamiento
- Servicios de ayuda diagnóstica
- Provisión de medicamentos
- Transporte de Pacientes

- **Acciones de promoción y prevención de la enfermedad tales como:**
 - **Vigilancia epidemiológica**
 - **Saneamiento ambiental,**
 - **fumigación,**
 - **manejo de excretas,**
 - **pozos sépticos,**
 - **control de vectores**
- **Atención psicosocial y rehabilitación**
- **Participación comunitaria**
- **Educación en Salud**

2.2.2 Salud

Son responsables de su diseño y ejecución:

- **Ministerio de Salud**
- **Direcciones de salud de los entes territoriales**
- **I.C.B.F**
- **Cruz Roja Colombiana**

Entidades competentes para certificar la condición de víctima de evento catastrófico o desplazado

- **Comités Locales de Emergencia (ecat)**

- La procuraduría General de la Nación
- La Defensoría del Pueblo
- La Personería Municipal o Distrital

Ley 387 del 18 de Julio de 1997:

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Y se crea el SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

"Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, con ocasión de las siguientes situaciones : conflicto armado interno disturbios y tensiones interiores violencia generalizada violaciones masivas a los derechos humanos infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden publico

artículo 2 - principios 1) los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar ayuda

humanitaria. 2) el desplazado forzado gozara de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente

artículo 2 - principios 3) el desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivos de raza, religión, opinión publica, lugar de origen o incapacidad física. 4) la familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar.

artículo 2 - principios 5) el desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. 6) el desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 7) los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.

artículo 2 - principios 8) el desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a mas restricciones que las previstas en la ley. 9) es deber del estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos la equidad y la justicia social.

artículo 7 - De los comités municipales, distritales y departamentales el gobernador o alcalde, o quien haga sus veces quien lo presidirá. el comandante de la brigada o su delegado. el comandante de la policía nacional en la respectiva jurisdicción o su delegado. el director del servicio seccional de salud o jefe de la respectiva unidad de salud, según el caso. el director regional, coordinador del centro zonal o director de agencia en los nuevos departamentos del instituto colombiano de bienestar familiar. un representante de la cruz roja . un

representante de la defensa civil . un representante de la iglesias . dos representantes de la población desplazada .

Ley 241 de 1995

Mediante la cual se declara la "Obligatoriedad de la atención en salud a las víctimas de atentados terroristas"

Decreto 1283 de 1996

"Reglamenta el funcionamiento del FOSYGA" (Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito)", define los requisitos para acreditar la condición de víctima y el pago (FIDUSALUD)

Documento CONPES 2804 de 1995:

Programación Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia.

Documento CONPES 2924 de 1997

Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada

Acuerdo 044 de 1997

Fija los criterios de distribución de los recursos provenientes del impuesto social, municiones y explosivos para poblaciones en condiciones de violencia, en zonas de conflicto armado, regiones con mayor frecuencia de lesiones intencionales, maltrato infantil, y NBI.

"PLANES DE POLITICA DE VIDA, SALUD Y PAZ"

Acuerdo 059 del 29 de Abril de 1997

Declara como evento catastrófico el desplazamiento masivo de población por causa de la violencia y otorga el derecho a recibir los

servicios de salud necesarios para la atención oportuna de la enfermedad derivada de la exposición de riesgos inherentes al desplazamiento.

Acuerdo 077 de 1997

Artículo 46 - Atención en salud para la población desplazada por la violencia y se obliga a la ARS a la atención de los desplazados afiliados en el lugar donde estén desplazados.

Acuerdo 085 de 1997

Se amplía el acuerdo 059 de 1997 para responder a las necesidades de salud, riesgos nutricionales, psicosociales y de medio ambiente.

Acuerdo 086 de 1997

Se destinan \$ 15.000.000 millones para la atención en SALUD para la población desplazada por causa de la violencia"

Constitución Nacional

La Constitución Nacional en su Artículo 49 dice

"La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud."

Sistema General de Seguridad Social en Salud - Ley 100

Declaración de Cartagena.

CAPITULO VI

Desafíos y Recomendaciones.

6.1. Desafíos para Colombia

Si bien los Estados de la región han respondido positivamente en lo que concierne a suscripción y ratificación de los tratados internacionales especializados en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, como en el caso de Colombia, se advierten serias fallas de observancia y aplicación. Los poderes públicos no han incorporado los derechos humanos de las mujeres de modo consistente en todos los ámbitos, con las obligaciones y alcances que los instrumentos internacionales establecen.

*Para Colombia, las políticas principales desde las cuales se organiza el quehacer estatal y se definen los entornos institucionales, Administración de Justicia, Políticas de Seguridad Ciudadana, Políticas de Defensa Nacional, no han sido comprometidas al abordarse las cuestiones de género. Las medidas adoptadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se mantienen en el plano periférico y dirigido, con el carácter de especiales, a sectores específicos. Persiste una comprensión de las mujeres como sector vulnerable, en perjuicio de una atención sobre los factores sociales, económicos y culturales que colocan a la población femenina en desventaja y bajo condición de riesgo.

*La enmienda legislativa y el desarrollo de normas para sancionar la violencia contra las mujeres ha sido el terreno principal sobre el cual los Estados de América Latina y el Caribe han

respondido. Las normas adoptadas tratan mayoritariamente sobre violencia familiar o doméstica y, en menor medida, sobre violencia sexual. Respecto a las normas sobre violencia familiar, no obstante condenarse las agresiones y maltratos y habilitarse procedimientos para conducir las denuncias, se advierten debilidades conceptuales y en el desarrollo jurídico, persistiendo criterios no compatibles con las provisiones establecidas en los instrumentos internacionales especializados para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. En lo que concierne a violencia sexual, esencialmente se han ido removiendo concepciones e indicaciones manifiestamente discriminatorias; sin embargo, ciertos patrones de violencia sexual no han sido sancionados expresamente.

* En Colombia, las reformas legislativas en materia de violencia familiar y sexual, no se han desarrollado acciones para medir su eficacia y su incidencia en la reducción de dicha violencia. No se ha implementado un soporte institucional efectivo para que las mujeres afectadas accedan y obtengan justicia, cuenten con protección y logren su rehabilitación. Predomina la autoprotección a cargo de las víctimas.

* La trata de mujeres, adolescentes y niñas con fines de explotación sexual y la asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la misma y de la prostitución, no han sido cuestiones abordadas por las respuestas institucionales.

* En lo que se refiere a la problemática sobre la mujer y los conflictos armados, el panorama regional muestra una absoluta falta de compromiso.

Se observan muy débiles esfuerzos por parte del Estado Colombiano, en cuando las acciones a su cargo que implican comprometer fondos públicos. En muchos países de la región, la respuesta institucional ha sido impulsada por la asignación de fondos de la cooperación internacional, dependiendo su continuidad de este flujo.

* Las desigualdades sociales en la región colombiana, están agudizadas en los últimos años, y expresadas en un incremento del número absoluto de pobres, vienen configurando una segmentación al interior de la población femenina en lo que a experiencia de justicia se refiere. Mientras un grupo muy reducido de mujeres puede aprovechar los avances desarrollados, para la mayoría de mujeres, aquellas sobre las que coincide especial vulnerabilidad, la experiencia predominante es la frustración cuando se trata de exigir justicia ante la violación de sus derechos, sea que ésta haya sido perpetrada por particulares o por el Estado.

* Las políticas de ajuste e implantación de la ortodoxia neoliberal en nuestros países, han profundizado riesgos y desventajas para amplios sectores de la población femenina. El impacto ha sido particularmente crítico sobre aquellas mujeres en quienes coinciden otras discriminaciones o situaciones de vulnerabilidad. Se debe

advertir que aquello que se extrae a las mujeres mediante las políticas principales no puede ser reparado a través de las políticas sociales.

“Junto con la angustia por cubrir las necesidades materiales, está el manejo de los conflictos en las relaciones familiares, los traumas emocionales y afectivos de los hijos y de ellas mismas, que tienden a quedarse en un plano secundario, a veces ignorado, ante la impotencia y el cúmulo de presiones. La familia como espacio privilegiado de la reproducción social y física de las personas y de la sociedad, se constituye en amortiguador y receptor de la tensión individual y colectiva, hecho que vulnera su dinámica y desarrollo, especialmente en aquellas situaciones donde la múltiple exigencia recae sobre una sola persona, la mujer.”¹⁴⁷

* En Colombia en cuanto a la educación, la capacitación formal y la alfabetización muestran una mayor prioridad para las mujeres que para los hombres. La capacitación técnica es menos demandada por ellas, quizá porque se supone que es un área de competencia de los hombres. Sin embargo, es claro que esta área incluye para las mujeres artes u oficios que les posibilitarían el ingreso a nuevos espacios laborales.

¹⁴⁷ Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos, 2001 (CODHES), UNICEF

* La mayor diferencia con respecto a la vivienda, se refleja en la insistencia de las mujeres para recibir apoyo para el mejoramiento. Sin embargo, es claro que tanto unas como otros exigen una atención prioritaria en materia de adquisición de la vivienda, como espacio vital en donde recomenzar sus vidas.

* Para las mujeres colombianas, las posibilidades de generación de ingresos están relacionadas con la microempresa o la consecución de un trabajo asalariado, y están mucho menos dispuestas a reiniciar actividades económicas de tipo agropecuario.

* Para los adultos, hombres y mujeres de las familias desplazadas, con un fuerte arraigo por la tierra, la añoranza del campo como un recurso importante para la subsistencia, sigue presente. Las posibilidades de contar, por lo menos, con el alimento básico, representa una opción que extrañan en la ciudad y que hace que el retorno represente una de las alternativas contempladas, si bien no compartidas por las nuevas generaciones que se acomodan más fácilmente a la vida citadina y empiezan a encontrarle ventajas a este nuevo ambiente.

Por otra parte, el retorno a actividades agropecuarias puede llegar a pesar más si ha sido parte importante de sus vidas la pertenencia a organizaciones campesinas, a sus luchas, por las que en muchos casos, hoy son perseguidos y desplazados.

* Es conveniente tener en cuenta que en Colombia, en las zonas rurales existe la desventaja de los hogares con jefatura de hogar

femenina se traduce en una mayor tendencia a la exclusión del acceso a la tierra, por las vías de propiedad, arrendamiento y aparcería y se acentúa con el tamaño de las parcelas. La pobreza de estos hogares se hace más visible cuando se analiza por los ingresos, que cuando se hace por las necesidades básicas insatisfechas. Así mismo, y dado el peso tradicional que tiene en las actividades agropecuarias el papel del hombre, se ha encontrado que los hogares con jefatura masculina y un mayor número de hombres en su composición familiar, tienen mejores condiciones de vida. Ello indica que la pobreza afecta en forma diferente a las familias, de acuerdo con el sexo del jefe y la proporción de hombres y mujeres que configuren los hogares.

De cara al futuro son tres las posibilidades que tiene Colombia, con respecto a la ubicación de los hogares desplazados forzosamente porque quieren retornar al lugar de donde salieron, o quedarse donde están o reubicarse en otro sitio del país.

Las respuestas de las jefes de hogares desplazados, comparadas con las de los hombres, muestran las siguientes tendencias:

- * Es evidente una menor disponibilidad de las mujeres colombianas jefes de hogar, comparada con la de los hombres, para regresar al lugar de donde fueron desplazadas y para irse a otro lugar. Sin embargo, el cansancio de un peregrinaje permanente y la gran incertidumbre frente al futuro, hacen que tanto mujeres como hombres manifiesten de manera prioritaria el deseo de quedarse en el lugar actual. Además del cansancio natural, muchos de ellos han ido ya

tejiendo nuevas relaciones sociales con sus vecinos, han tenido que buscar formas de generar ingresos para sobrevivir y han encontrado algunos servicios que pueden significar algún tipo de mejoramiento en sus condiciones de vida. Particularmente, para quienes han salido de zonas rurales marginales, sin mayor infraestructura de servicios básicos, la ciudad puede constituirse en una esperanza y un espejismo frente a las posibilidades de construir un futuro mejor para sus familias.¹⁴⁸

En este sentido, la población colombiana desplazada, en una proporción mayoritaria, manifiesta características de expectativas similares a las de los migrantes por razones económicas, que se fundamentan en condiciones objetivas que tienen que ver con la pobreza y marginamiento de los municipios rurales del país. Pero también tales valoraciones están fundadas en la polaridad rural urbana, que ha llevado a constituir a las ciudades como el paradigma del desarrollo y de la calidad de vida de las sociedades.

* Es importante resaltar que el repoblamiento en municipios rurales del país, con población que ha sido desplazada, bien puede constituirse en una opción importante contando, por supuesto, tanto con la voluntad de estas familias, como con la voluntad de las instancias gubernamentales y de las sociedades locales para garantizar

¹⁴⁸ (CODHES), UNICEF 2001: Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos.

unas mejores condiciones de vida y de trabajo. Una experiencia conocida permite dar cuenta de cómo la reubicación en entornos rurales, de alguna manera familiar y similar en cuanto a características de tipo climático, por ejemplo, puede llegar a ofrecer espacios más tranquilos para que estos hogares vuelvan a empezar con perspectivas económicas, políticas y sociales. Pero tal experiencia ha sido posible gracias a su carácter gradual y no colectivo.

* Si bien es cierto que Colombia, ya ha reconocido el problema grave de la población desplazada por parte de las instancias del gobierno central, tal reconocimiento está muy lejos de ser asumido por las dependencias regionales y locales. El estigma que se lleva al asumir que se es desplazada (o), y su equivalencia a reinsertado guerrillero, perseguido y delincuente, ha impedido reubicar a grupos organizados de población, ni siquiera de manera temporal.¹⁴⁹

6.2. Recomendaciones para Colombia

6.2.1 Generales

* *“Llamamos la atención en Colombia, sobre la necesidad de comprometer las políticas matriciales, tales como Políticas de*

¹⁴⁹ (CODHES), UNICEF 2001: Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos.

Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y aquellas relativas a la Administración de Justicia. La respuesta anterior se movió sobre el terreno de lo periférico, con impulsos episódicos, discontinuos, dependientes de un conjunto de contingencias, altamente vulnerables a lo considerado como “prioridades estatales” o, incluso, prioridades de una administración.

** Alertamos sobre la condición sustancial que reviste para los derechos humanos de las mujeres colombianas la construcción de entornos democráticos, bajo regímenes que se ciñan a la regla de derecho, donde se garantice un poder judicial independiente y eficiente. Igualmente, hacemos un llamado a corregir aquellas prácticas que atentan contra el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización por parte de la sociedad civil respecto de la gestión pública.*

** Invocamos al Estado Colombiano a tomar en cuenta las observaciones planteadas por las organizaciones de mujeres, los Comités Monitores de los Tratados y otras instancias dispuestas para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres.*

** Urgimos a Colombia, que se doten de manera impostergable de herramientas que les permitan medir su desempeño e incidencia sobre los patrones de violencia y discriminación que afectan a las mujeres de la región.*

**Instamos al Estado a suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al igual que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A aquellos países que no lo hubieran hecho, suscribir y ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer e incorporarla en su ordenamiento jurídico.*

** Demandamos que Colombia comprometa fondos públicos suficientes para implementar planes, programas y servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y atender a las personas afectadas. Al respecto, planteamos la formulación de planes de largo plazo, garantizados financieramente, consensuados entre las diversas fuerzas políticas, a efectos de trascender su vulnerabilidad frente a cambios de administración.*

** Llamamos la atención sobre la necesidad de producir estadísticas que permitan verificar los avances. Las respuestas institucionales deben mostrar su eficacia en acercarnos a resultados concretos sobre los que se pueda afirmar que la realidad/ problema ha comenzado a ceder*

** Instamos al Estado Colombiano, a garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y atender los daños, riesgos y desventajas específicas experimentados por mujeres y niñas en el marco de conflictos, post conflicto y en zonas militarizadas. Los programas e intervenciones en materia humanitaria deben contar*

previamente con una proyección de los impactos en términos de género y asegurar que el personal a cargo de la ejecución cuente con las capacidades y sensibilidad necesaria para garantizar desempeños no discriminatorios”¹⁵⁰

6.3.2. Específicas

- * *Fortalecer la legislación antidiscriminatoria, incorporando lo desarrollado por las provisiones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Incluir expresamente la prohibición de discriminación por orientación sexual.*

- * *En la legislación colombiana, y adopción de medidas en materia de violencia contra las mujeres colombianas, se debe tener altamente en cuenta la situación de aquellas mujeres pertenecientes a sectores en los que coinciden otras discriminaciones y que encuentran particulares dificultades para acceder y obtener protección institucional.*

- * *Sancionar prácticas dentro del mercado laboral colombiano, que imponen a las mujeres restricciones y condiciones en materia reproductiva para acceder y conservar el empleo. Implementar*

¹⁵⁰ (CLADEM) 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

mecanismos efectivos de inspección que vigilen el cumplimiento de disposiciones en materia laboral.

** Revisar la legislación producida en materia de violencia familiar, afín de ajustarla a las provisiones establecidas en los instrumentos internacionales especializados para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres en relaciones familiares o de pareja, independientemente del vínculo o de la subsistencia de éste, debe ser objeto de atención específica..*

** Derogar las leyes en materia penal que conservan concepciones tradicionales frente a la violencia sexual. Adoptar y/o reforzar las leyes existentes de modo que aseguren la persecución pública de los delitos de violencia sexual en tiempos de paz como en situaciones de conflicto armado. Sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral, en los espacios educativos y en los servicios de salud Derogar las leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo de mutuo consentimiento*

** Respaldo constitucional y legalmente, los derechos sexuales y reproductivos, y las garantías para una decisión libre e informada en estas esferas. Garantizar, bajo normas de jerarquía superior, la prestación de servicios de calidad en salud sexual y reproductiva que aseguren a todos los grupos de mujeres la conservación y recuperación de su salud y la implementación de sus decisiones reproductivas. Desarrollar programas eficaces para reducir la mortalidad materna, proteger el derecho de las gestantes a conservar*

sus vidas y eliminar todas aquellas prácticas que las exponen a riesgos y sufrimientos innecesarios. Implementar mecanismos accesibles para efectuar reclamaciones por parte de las usuarias de los servicios de salud. Reconocer el derecho de adolescentes y jóvenes a recibir información para una sexualidad saludable y a tener acceso a medios para prevenir embarazos no deseados. Revisar la legislación que penaliza el aborto. Suministrar información y asegurar atención médica adecuada y oportuna en los casos de aborto legal. Adoptar medidas para asegurar a las mujeres el acceso y la obtención de justicia. Especialmente, debe asegurarse asistencia y defensa legal para las víctimas de violencia de género, incluyendo la gratuidad de todas las certificaciones o pericias que contribuyan al esclarecimiento del delito.

** Desarrollar garantías procesales para las víctimas de violencia de género.*

** Comprometer en todos los poderes públicos colombianos, la incorporación de los derechos humanos de las mujeres. A nivel de las instancias legislativas, introducir la obligatoriedad de aplicar el test de discriminación respecto de las leyes en trámite. En el plano judicial, impulsar en las instancias de mayor jerarquía la producción de directivas sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de promoción y protección de derechos humanos de las mujeres. Garantizar la difusión de la jurisprudencia sobre casos motivados en discriminación o violencia de género.*

- * Involucrar en el proceso de reforma de la administración de justicia, la participación de organizaciones de mujeres con experiencia en la problemática de discriminación y violencia de género. En dichos procesos, se debe garantizar la inclusión de acciones de capacitación en derechos humanos de las mujeres (instrumentos internacionales y normatividad interna) a operadores de la administración de justicia de los diversos niveles.*

- * Introducir entre los criterios de selección, promoción y permanencia laboral de servidores públicos, la conducta respetuosa y sensible a los derechos humanos de las mujeres.*

- * Desarrollar un marco consistente para prevenir, sancionar y erradicar la prostitución forzada y la trata de mujeres y menores. Reforzar la persecución nacional e internacional de los delitos de tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Brindar protección a las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad frente a la explotación sexual y servicios para las víctimas de prostitución forzada.*

- * Impulsar e implementar una instancia de monitoreo regional especializada en lo que respecta a la situación de las mujeres bajo conflicto armado y post conflicto, incluidas aquellas en localidades militarizadas. Dicha instancia deberá desde una perspectiva de derechos humanos y bajo un enfoque de género, orientar a los Estados a que cumplan con brindar protección adecuada, efectiva y*

oportuna a la población se menina bajo dichas circunstancias, incluida la población desplazada y refugiada. Igualmente, deberá velar por la participación de las mujeres en los procesos de pacificación y reconstrucción.

** Implementar en Colombia, en el sistema educativo formal, acciones sostenidas de educación en derechos que incluyan los derechos humanos de las mujeres, y crear mecanismos dentro de los propios establecimientos educativos que sean adecuados para facilitar las denuncias de niñas y adolescentes, motivadas en hechos de discriminación y violencia en cualquier ámbito que ocurran.*

** Adoptar medidas para proteger los derechos de las mujeres en reclusión, remover criterios discriminatorios a nivel de las políticas penitenciarias, implementar las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas. Estudiar las causas del incremento de la criminalidad femenina, el tipo de delitos en los que resultan más frecuentemente involucradas, la situación de las mujeres en cárcel y los efectos de la reclusión sobre las mujeres colombianas".¹⁵¹*

¹⁵¹ (CLADEM) 2000: Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.

Conclusiones

0. Nadie pone en duda el trascendental valor que la Declaración de los Derechos Humanos, representa para la humanidad. Es innegable la concepción patriarcal que ha prevalecido en el mundo, ha sido plasmada en los distintos instrumentos nacionales e internacionales, al considerar al hombre (varón) como paradigma de la humanidad; situación que se ha reflejado en los derechos humanos, en su lenguaje, en sus ideas, valores, costumbres y hábitos, pues los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: la masculina, a través de cuyos sentimientos y pensamientos se nos ha ubicado en la sociedad.

1. No obstante, los movimientos de las mujeres a nivel mundial, han continuado la labor de promoción y vigencia efectiva de nuestros derechos y libertades fundamentales, luchando por una reformulación global de los derechos humanos con perspectiva de género, y esto ha dado fruto.

2. En Colombia, la situación es realmente difícil, por el accionar de 40 años de una guerrilla subversiva y terrorista, porque es necesario consolidar una verdadera cultura de los derechos humanos, una educación que debemos lograr en la gente para que sea más consciente de los derechos humanos y, así romper la distancia que existe entre las definiciones y decisiones de Estado y las repercusiones que ellas tienen en la sociedad colombiana; porque sólo se ha centrado el Estado en la acción de dos ejes fundamentales: el primero de ellos es, el desarrollo jurídico, mediante la consagración de los derechos en el

orden constitucional y legal, y segundo, la creación de instituciones para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de la mujer.

3. Los Derechos Humanos de la mujer colombiana, han sido constantemente violados por ello, se hace necesario el conocimiento de tales derechos para hacerlos valer, a través de los órganos competentes nacionales e internacionales.

4. La historia de la mujer colombiana se ha caracterizado últimamente por la violencia, la cual aumenta debido al conflicto armado que se vive en ese país, y lo agrava el desplazamiento forzado.

5. En el orden político Colombia, ha incorporado el tema en la agenda de los procesos de paz que se han intentado en el país, proclamando en los foros internacionales, relativos a la materia el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de dichas ratificaciones.

Estas acciones son sin lugar a dudas de gran importancia para el país. Permitiendo para las colombianas el respeto de sus derechos no sólo al Estado mismo sino también a la sociedad civil. Es necesaria una política integral en materia de los derechos humanos que tenga efecto inmediato para la protección al derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral. Esto es una prioridad para el Estado Colombiano.

Se deben incorporar propósitos a mediano plazo como lo son mejorar la calidad de vida de las colombianas, debe encaminarse a transformar la cultura con predominio de las conductas violentas y aclimatar la cultura de la solución pacífica de los conflictos y de fortalecimiento de la capacidad de las personas para reivindicar y respetar sus derechos. No olvidando que es indispensable en

la estrategia política, en defensa de los derechos humanos garantizar la eficacia en la justicia, de la Ley, de la fuerza, del tributo por parte del Estado colombiano.

Los derechos humanos deben proponerse – y ese sería su objetivo principal- cambiar las actitudes transgresoras negativas, en actitud positiva; cambiar comportamientos y actitudes de irrespeto a la dignidad y a los derechos de los demás, por concepciones de convivencia solidaria y pacífica, y desarrollar el principio de que si somos generadores de conflictos también debemos ser autores de las soluciones para resolverlos.

6. Colombia tiene un gran reto, debe lograr la paz que desean la mayoría de los habitantes de ese gran país. Es urgente la necesidad de un diálogo sincero, que facilite la salida de la situación tan dolorosa que vive Colombia, y que no sólo afecta a sus habitantes internos, sino también a todos nosotros quienes nos sentimos identificados con el dolor que viven los habitantes del vecino país.

Bibliografía

ANÓNIMO (1998) ¿Se respetarán algún día los Derechos Humanos?, Revista Despertad, Bogotá. Pág.11 .

BOBBIO, Norberto y Mateucci, Nicola, (1981): “Diccionario de Política” Bogotá siglo XXI, Tomo I, pág.354.

(CODHES),UNICEF (2001): Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos, “Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada,” Bogotá, Colombia Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 23 abr.

MICROSOFT Enciclopedia ® Encarta® 99. VOX - Diccionario General de la Lengua Española, © 1997 Bibliografía, S.A., Barcelona.

GURR, Ted Robert, (1974): “El Porqué De Las Rebeliones”, México, editores Asociados, S.A.

GRUPO DIAL (2001): Desplazamiento Forzado: Tendencias, Respuesta Estatal y nuevos Desafíos .Internet.

CLADEM.(2000): Informe presentado por la Comisión Latino Americana de los Derechos Humanos de la Mujer.Internet.

ONU (2002): Informe de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Comisión de Derechos Humanos - 58.º período de sesiones.

KALYVAS, Stathis. (2001): "Violencia y Guerra Civil. Esbozo Teórico." Análisis Político, Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, No 42 enero a abril.

LARA S, Patricia, (2000): "Las Mujeres en la Guerra". Bogotá, Editorial Planeta,

NEIRA FERNÁNDEZ, Enrique. (1989) La Violencia en Colombia-40 años de laberinto- Bogotá,Cali. Pontificia Universidad Javeriana.

------(2001): "Colombia."Observatorio de Política Internacional. Mérida. Talleres Gráficos Universitarios.

----- (1999): "Reingeniería Política.Fenomenología del caso colombiano." Politeia. Caracas., Universidad Central de Venezuela, No 23, págs 113-140.

MEERTNS Donny. (1995): "Mujer y Violencia En Los Conflictos Rurales". En Análisis Político, Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No 24.

ORTIZ GALVIS, Ligia.(1998): "Los Derechos Humanos En Colombia Cultura y Compromiso", Revista Javeriana, Bogotá.octubre.

ANÓNIMO,(2002): "Embarcadas en la paz", Bogotá, 4 de marzo.